PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.

viernes, 05 de febrero de 2016

Â

PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.

SEÑOR JUEZ FEDERAL:

ROBERTO VELEZ, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 6.146.316, por su propio derecho, en autos NÂ° 020-F., caratulados "Fiscal c/MenÃ©ndezâ€!" me presento a V.S. y digo:

I- DATOS DEL QUERELLANTE:

Que los datos personales de los querellantes son:

Roberto Velez, nacido en Mendoza el dÃ­a 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.

II. DOMICILIO LEGAL:

Que constituimos domicilio legal, para todos los fines que correspondan a la presente causa, en la Ciudad de Mendoza.

III. OBJETO:

Que en virtud del presente escrito venimos a constituirnos en querellantes en los tÃ©rminos de los arts. 82 a 83 del CPPN, en contra de quienes resulten imputados por la responsabilidad mediata e inmediata en los hechos que motivan esta presentaciÃ³n y cuya exhaustiva investigaciÃ³n dejan peticionada.

IV. DATOS PERSONALES DE LAS VICTIMAS:

Los datos personales de la vÃ­ctima en los presentes obrados son los siguientes:

1) Roberto VÃ©lez, nacido en Mendoza el dÃ­a 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.

V. HECHOS:

A fin de cumplir lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 del C.P.P.N. se realiza un breve relato de los hechos en que se funda esta peticiÃ³n:

Roberto VÃ©lez integrÃ³ el Partido Comunista y fue militante estudiantil. Como tal ocupÃ³ el cargo de Secretario General de la FederaciÃ³n Universitaria local y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias PolÃ­ticas y Sociales de la UNCuyo.

Como consecuencia de su actividad polÃ­tica fue expulsado de la Universidad en el aÃ±o 1976, como asÃ­ tambiÃ©n despedido de su trabajo en el Banco Agrario, en la Cooperativa de Seguros San CristÃ³bal y en la Bodega Quiroz.

En noviembre de 1975 una bomba fue colocada en su domicilio. El segundo atentado con bombas ocurre en junio de 1976, a lo que se sumÃ³ el saqueo de su casa. En esta Ãºltima oportunidad fue detenido y luego liberado.

El 9 de Agosto de 1976 fue apresado nuevamente, en circunstancias en las que volviÃ³ a de una reuniÃ³n partidaria.

Durante esta detenciÃ³n fue torturado y estuvo desaparecido por varios meses, para luego ser "legalizado" a travÃ©s de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En este periodo pasÃ³ por el destacamento Almirante Brown de Godoy Cruz, luego fue trasladado a la CompaÃ±Ã­a de Comunicaciones del EjÃ©rcito. De aquel lugar era sacado del calabozo vendado y atado, y fue sometido a torturas.

Lo trasladan a la cÃ¡rcel Provincial y finalmente, en octubre de 1976 fue llevado a la U9 de La Plata donde permaneciÃ³ hasta diciembre de 1977.

VI.- Sobre el contexto en el que se produjeron los hechos

Acorde a la mÃ¡s reciente jurisprudencia internacional, verbigracia el caso "La Cantuta Vs. PerÃº" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde hacer referencia en el anÃ¡lisis de los hechos a lo relativo a las prÃ¡cticas sistemÃ¡ticas y generalizadas de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la Ã©poca en que ocurrieron los hechos. En concreto debemos referirnos al plan sistemÃ¡tico que desde el aparato del Estado se desarrollara en el perÃ­odo comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983.-

En efecto, la existencia de un plan criminal comÃ³n se halla acreditada mediante el elenco de Ã³rdenes secretas, directivas y decretos que fueron promulgados con la finalidad de ejecutar este plan. Estas Ã³rdenes Secretas constituyen herramientas legislativas de lo que se puede denominar, en palabras empleadas por SuÃ­irez Mason en el trascurso del interrogatorio que le fue efectuado ante un juez de Estados Unidos, "State of Siege of Law", esto es, estado de excepciÃ³n en tÃ©rminos de teorÃ­a del estado, y por lo tanto, las Ã³rdenes secretas son en realidad y en la prÃ¡ctica las "leyes del sistema de planificaciÃ³n y ejecuciÃ³n de las polÃ­ticas de represiÃ³n y exterminio".

Es de suma importancia destacar la relaciÃ³n que existe entre el contexto de referencia y los crÃ­menes de lesa humanidad, a los que nos referiremos oportunamente. SegÃºn Doudou Thiam, Relator Especial de la ComisiÃ³n de Derecho Internacional de la ONU (1983 - 1995): "Un acto inhumano cometido contra una sola persona podrÃ­a constituir un crimen contra la Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta segÃºn un plan, o si presenta un carÃ¡cter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) un acto individual que se inscribiera dentro de un conjunto coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo mÃ³vil: polÃ­tico, religioso, racial o cultural".

Resulta conveniente transcribir las conclusiones arribadas por la ComisiÃ³n Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco a nuestro paÃ­s en el aÃ±o 1979 y vertidas en el informe sobre la situaciÃ³n de los derechos humanos en

Argentina. En efecto dejo claro que: "â€por acciÃ³n u omisiÃ³n de las autoridades pÃºblicas y sus agentes, en la RepÃºblica Argentina se cometieron durante el perÃ­odo a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la DeclaraciÃ³n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la ComisiÃ³n considera que esas violaciones han afectado:

- a) al derecho a la vida, en razÃ³n de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres despuÃ©s de su detenciÃ³n; preocupa especialmente a la ComisiÃ³n la situaciÃ³n de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto;
- b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposiciÃ³n del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situaciÃ³n se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opciÃ³n previsto en el ArtÃ­culo 23 de la ConstituciÃ³n, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye una verdadera pena;
- c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemÃ¡tico de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya prÃ¡ctica ha revestido caracterÃ­sticas alarmantes;
- d) al derecho de justicia y proceso regular, en razÃ³n de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantÃ­as en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la prÃ¡ctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden pÃºblico, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.

2. Con respecto a otros derechos establecidos en la DeclaraciÃ³n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la ComisiÃ³n seÃ±ala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan tambiÃ©n la plena vigencia de los derechos humanos en la RepÃºblica Argentina. En relaciÃ³n a estos derechos la ComisiÃ³n observa lo siguiente:

- a) que el ejercicio pleno de la libertad de opiniÃ³n, expresiÃ³n e informaciÃ³n se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepciÃ³n que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicaciÃ³n;
- b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicaciÃ³n de las mismas, situaciÃ³n que ha incidido particularmente en el derecho de asociaciÃ³n sindical debido a actos de intervenciÃ³n militar y a la promulgaciÃ³n de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora;
- c) que los derechos polÃ­ticos se encuentran suspendidos;
- d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la ComisiÃ³n sÃ­ pudo comprobar que los Testigos de JehovÃ¡ tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una polÃ­tica oficial antisemita, en la prÃ¡ctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judÃ­os.

3. Asimismo, la ComisiÃ³n considera que las entidades de defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstÃ¡culos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.

VII. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD:

Los hechos descriptos en la presente querrela forman parte de los denominados "crÃ­menes de lesa humanidad", delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por afectar a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservaciÃ³n de la especie humana y es a la luz de los principios del Derecho Penal Internacional que deben ser interpretados y juzgados.

Al decir de la Corte Suprema, los crÃ­menes de lesa humanidad tienen como presupuesto comÃ©n el de "dirigirse contra la persona o condiciÃ³n humana y en donde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislaciÃ³n de derecho nacional comÃ©n, en la medida en que sea vÃ­ctima colectiva a la que va dirigida la acciÃ³n justamente por esta circunstancia, de la que participan los crÃ­menes contra la humanidad, como los tradicionalmente denominados crÃ­menes de guerra, que se los reputa como delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar porque merecen la sanciÃ³n y la reprobaciÃ³n de la conciencia universal al atentarse contra los valores humanos fundamentales" (Fallo 318:2148, considerandos 31 y 32).

Asimismo, estos delitos hoy son perseguibles penalmente en funciÃ³n del nuevo marco normativo que impera en la Argentina con la anulaciÃ³n, mediante ley 25.779, de las Leyes de la Impunidad, (Ley de Obediencia debida y Punto Final), nulidad confirmada con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso SimÃ³n, Julio HÃ©ctor y otros s/ privaciÃ³n ilegÃ­tima de la libertad, etc. â€Causa NÂ° 17768-".

En consecuencia se trata de delitos imprescriptibles, es decir, que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la ConvenciÃ³n sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, pues repugna a la comunidad internacional que estos delitos queden impunes por el solo transcurso del tiempo.

En el caso concreto es indudable la existencia de un crimen de las dimensiones seÃ±aladas, en efecto de la jurisprudencia de Tribunales especializados en la materia, como puede ser en el caso de referencia el Tribunal Internacional Para la Antigua Yugoslavia (ICTY), se desprenden que sus rasgos caracterÃ­sticos son:

- 1) El crimen tiene que ser cometido directamente contra una poblaciÃ³n civil. ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001; (Appels Chamber) 12.06.2002. parr 90.
- 2) No es necesario que sea contra la totalidad de la poblaciÃ³n, pero si un nÃºmero suficiente (representativo de ella)

ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 90.

3) La exigencia de ataque contra la poblaci3n civil viene a significar en estos momentos una actuaci3n de conformidad con pol3ticas de Estado o de una organizaci3n no estatal, pero que ejerce el poder pol3tico "de facto".

4) El ataque debe ser "generalizado o sistem3tico". Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001, para 431; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 179; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 206; Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 94; Naletilic and Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 203.

5) El ataque es el que debe ser "generalizado o sistem3tico", no los actos del acusado.

6) Puede ser calificado como crimen contra la humanidad un simple acto, si est3 en conexi3n con un ataque "generalizado o sistem3tico". Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 178; Kupreskic et al. (Trial Chamber) 14.01.2000, para 550.

7) Intencionalidad. El autor debe tener el prop3sito o intenci3n de cometer los delitos subyacentes. Vasilejevic, (Trial Chamber) 29.11.2002, parr. 37.

8) Conocimiento: El autor debe tener conocimiento de que participa en un ataque generalizado o sistem3tico. Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 102, 410; , Tadic (Appels Chamber) 15.07.1999, parr 271; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 185; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 244, 247. Debe tener conocimiento del ataque y del nexa entre sus actos y el contexto,

9) Este conocimiento del contexto es inferible de la concurrencia de una serie de elementos, tales como el conocimiento del contexto pol3tico en que se produce, funci3n o posici3n del acusado dentro del mismo, su relaci3n con las jerarqu3as pol3ticas o militares, amplitud, gravedad y naturaleza de los actos realizados, etc.. BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 258-259.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional regional, a su turno, ha sistematizado en sus 3ltimas sentencias la doctrina de la misma en relaci3n con los cr3menes contra la humanidad y las caracter3sticas de 3stos.

As3-, en casos como Almonacid Arellano Vs. Chile, La Cantuta Vs. Per3 o Goiburú Vs. Paraguay ha ratificado el car3cter de ius cogens de que goza la prohibici3n de estos cr3menes, con las obligaciones que de ello se derivan para los estados, principalmente la de enjuiciar a los responsables y la imposibilidad de amnistiar estas conductas.

Por ello la penalizaci3n de estos cr3menes es obligatoria conforme al derecho internacional general.

VIII. RESPONSABLES:

La responsabilidad por estos hechos comprende a todos los que de alg3n modo han intervenido, en su calidad de autores mediatos y directos, en funci3n de los distintos grados de responsabilidad asumidos, de acuerdo a los principios desarrollados por Roxin a partir de los casos jurisprudenciales Eichmann y Staschynski y formulada como "teor3a del dominio de la voluntad a trav3s de aparatos organizados de poder", principios consagrados por nuestra Jurisprudencia en la Causa N3o 13 contra las Juntas Militares en el a3o 1985.

As3-, la moderna doctrina penal, a fin de dar respuestas a situaciones que no pueden encuadrarse en los criterios tradicionales, entendi3 que la responsabilidad penal debe basarse en la teor3a del dominio del hecho, considerando AUTOR a quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el s3 y el c3mo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuraci3n central del acontecimiento. Esta teor3a producida por el finalismo de Welzel, fue desarrollada y precisada en sus l3mites y contenidos por Claus Roxin en su obra "Autor3a y dominio del hecho en Derecho Penal" (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edici3n 2000).

Este autor parte de la idea expresa que quienes mueven los hilos de un aparato organizado de poder, tienen inter3s en la realizaci3n del hecho, tanto como el inductor, por lo que el fundamento de su autor3a no puede sustentarse en una posici3n subjetiva con relaci3n al hecho que se realiza, sino s3lo en el mecanismo de funcionamiento del aparato en el marco en el que se act3a.

La tesis del dominio del hecho debe ser utilizada a fin de juzgar los delitos de lesa humanidad que aqu3- denuncian, por cuanto aquellos fueron cometidos mediante la utilizaci3n de un aparato organizado de poder desarrollado desde el Estado y en el marco de la no vigencia del Estado de Derecho.

Por lo expresado promovemos la presente constituci3n de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisi3n de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuaci3n, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la 3poca en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".

Se encuentra suficientemente acreditada ante la Justicia Federal de Mendoza, la responsabilidad penal que le cabe a los integrantes de la cadena de mandos con responsabilidad decisoria y actuaci3n operativa a la fecha de los hechos. A tal efecto solicitamos se impute y se proceda a la inmediata detenci3n de las siguientes personas:

1) Luciano Benjam3n Men3ndez, comandante de la Zona 3, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979.

2) Integrantes del Comando Militar de la Subzona 33 a la fecha en que se produjeron los hechos. Nos remitimos a la descripci3n de su organizaci3n y funcionamiento efectuada por la Excma. C3mara Federal de Mendoza en autos N3o 49.772-L-878 "L3pori, Mario Ram3n s/ Planteo de Incompetencia". Ellos son:

A) Tamer Yapur, 23 Comandante de la VIII Brigada de Infanter3a de Monta3a a la fecha del hecho denunciado. El Comandante, Gral. Maradona, ya falleci3.

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la 3poca) Coronel Federico Segura, Capitanes Am3Icar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corval3n, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, Jos3

Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Hctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

4) Integrantes de la Comunidad Informativa (personal de los Servicios de Inteligencia) y del Comando de operaciones Táctico (personal de operaciones), participantes de la actividad de persecución, detección, secuestro, privación de la libertad en lugares clandestinos, interrogatorios bajo tormento y homicidios, ocultamiento del destino final de la víctima y de sus restos.

X. MEDIDAS ÚTILES.

a) Documental:

1) Nos remitimos al organigrama de la Represión acompañado en causa caratulada "Pérez, Jorge Albino, Pérez, Emiliano, Fonseca, Gloria Nelly Desaparecidos", el cual pedimos se agregue a la presente.

XI. NOTIFICACIONES:

Conforme lo dispone el art. 92 del C.P.P.N. y la jurisprudencia mayoritaria en resguardo del debido proceso legal y el derecho de defensa, corresponde y así lo pedimos, que oportunamente se proceda a notificar la presente constitución en querellantes a quienes resultan imputados, en forma personal, y a sus defensores en los domicilios legales.

XI- PETITORIO:

Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:

1º) Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido domicilio legal.

2º) Se me confiera la intervención que por ley corresponda a los querellantes particulares artículo en virtud de lo establecido por el artículo 83 y siguientes del C.P.P.N.

3º) Se tenga presente la prueba ofrecida para su oportunidad.

Proveer de Conformidad.

ES JUSTICIA.

(Fuente:Rdendh).

Â